

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Por sentencia de 11 de junio del año dos mil veintiuno, en los autos RIT O-170-2021, del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se condenó a Tommy Lee Bermeo Villena y a Carlos Luis Gonzales Bravo, a sufrir cada uno la pena efectiva de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autores, en grado de desarrollo de consumado, del delito reiterado de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso segundo, en relación con el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal; hechos perpetrados el 22 de mayo de 2020, en la comuna de Independencia, de esta ciudad.

En contra de dicho fallo la defensa del condenado, Tommy Lee Bermeo Villena, presentó recurso de nulidad de acuerdo a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con las letras c) y d) del artículo 342, del mismo cuerpo legal.

Asimismo, de manera independiente la defensa del condenado, Carlos Gonzales Bravo, dedujo su propio recurso de nulidad, con el fundamento de que la sentencia adolece del vicio contemplado en el artículo 373 letra b), de la misma norma adjetiva penal.

El veintidós de junio del año en curso, se declaró admisibles sendos recursos y una vez realizada su vista, se fijó para el día de hoy la lectura de su fallo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se adelantó, la defensa del condenado, Tommy Lee Bermeo Villena, presentó recurso de nulidad de acuerdo a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, argumentando que la sentencia omitió los requisitos establecidos en el artículo 342, del mismo cuerpo legal: tanto en su letra letra c), referida a que la sentencia deberá contener la exposición clara, lógica y completa de

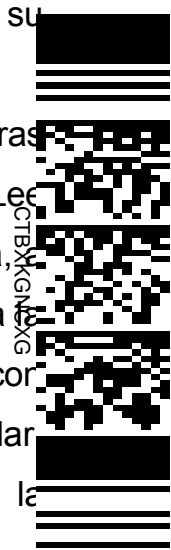


cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; como en la letra d), que prescribe al respecto que también deberá contener las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. Alegando, al respecto, *“Atendido que la sentencia contradice las máximas de la experiencia y los principios de la lógica, en concreto el principio de razón suficiente”*.

SEGUNDO: Que, el Ministerio Público acusó al imputado de dos delitos que calificó como robo con intimidación reiterado, en grado de consumado, respecto de los siguientes dos hechos.

El hecho N° 1, ocurrido el día 22 de mayo de 2020, a las 16:00 horas aproximadamente, en el paradero ubicado en la intersección de las calles Belisario Prat con Inglaterra, en la comuna de Independencia, consiste en que los acusados Carlos Luis Alfredo Gonzales Bravo y Tommy Lee Bermeo Villena, previamente concertados, junto a un tercer sujeto no identificado, se acercaron a la víctima Valeska Mendoza Cares, la apuntaron con un arma que aparentaba ser de fuego y le manifestaron que se quedara quieta o que de lo contrario la iban a matar; exigiéndole la entrega de su teléfono celular, el cual procedieron a sustraer, correspondiendo éste al teléfono marca Motorola modelo G4; para luego huir juntos del lugar con la especie sustraída en su poder.

El hecho N° 2, el mismo día 22 de mayo de 2020, a las 16:15 horas aproximadamente, los acusados Carlos Luis Alfredo Gonzales Bravo y Tommy Lee Bermeo Villena, junto a un tercer sujeto no identificado, llegaron hasta calle Francia, la altura de la numeración 1207, misma comuna de Independencia, y se acercaron a la víctima Loreto Arrué Ávila; la golpearon con una piedra en la cabeza, la apuntaron con un arma que aparentaba ser de fuego y le exigieron que soltara el teléfono celular sustrayéndole su teléfono marca Iphone modelo 7; para luego huir del lugar con la especie sustraída en su poder.



TERCERO: Que, a este respecto, según la recurrente, los vicios radican en que la sentencia:

a) Omite el señalamiento de los hechos que diere por probados y la debida conexión entre esos hechos y los medios probatorios (artículos 297 inc. 3° y 342 letra c);

b) Su fundamentación no se hace cargo de toda la prueba rendida ante él y no permite la reproducción del razonamiento utilizado para llegar a la decisión (artículo 297 inc. 2° y 3°);

c) Valora de la prueba contradiciendo los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados (artículo 297 inc. 1°); y,

d) No cumple con la exigencia de claridad, corrección lógica y completitud a que se refiere el artículo 342 del Código Procesal Penal, no solo respecto de los hechos y circunstancias de la causa, sino que también en relación a la valoración de los medios de prueba que fundamentaren las conclusiones de la sentencia, tal como se desprende de lo prevenido por la letra c) del norma legal anteriormente citada.

Esto, porque de acuerdo al mérito del proceso, la prueba de cargo no habría resultado del todo idónea para derribar las barreras de la presunción de inocencia; pues, califica de débiles los antecedentes incriminatorios que debían vincular al sentenciado en la intervención culpable y penada por la ley, fuera de toda duda razonable y posible.

En la versión de la defensa, el encartado solo se encontraba en las cercanías de donde acaecieron los hechos, pero lo cierto es que las imputaciones que hace el funcionario de carabineros no son del todo prístinas, no resultan del todo claras.

Por lo que la abogada defensora argumenta, que *“Así las cosas y existiendo cierta incertidumbre de la real participación debió dictarse fallo exculpatario a mi representado, atendido la duda razonable que genera su participación culpable y penada por la ley en los llevados a Juicio Oral”*. □□ Añade el recurso, que se desprende del considerando Cuarto que el sentenciado que recurre declaró en todo momento no conocer al coimputado. Fue detenido cuando se encontraba esperando a su tío y a la esposa en compañía de un amigo suyo, quien no fue aprehendido junto a él

simplemente porque andaba en bicicleta; y, que fue subido al carro policial, donde ya se encontraba el coimputado, a quien él no conocía ni le habló.

El recurso, entonces, estima que en la sentencia se infringe el principio de razón suficiente en la valoración de la prueba, pues falta una motivación concordante, verdadera y suficiente, dado que los razonamientos corresponden solo a las propias e íntimas convicciones de los juzgadores.

CUARTO: Que, por su parte, en el considerando Quinto de la sentencia del *a quo*, la víctima del hecho N° 1, doña Valeska Carolina Mendoza Cares, declara que estaba en la comisaría esperando para denunciar el delito cuando carabineros llegó con los imputados en calidad de detenidos, a quienes ella reconoció por sus ropas.

Esta identificación, y el valor que le es atribuido, se contradiría con la declaración posterior de la víctima, que señalaba que no estaba segura de que hoy los podría reconocer. Asimismo, en la declaración describe a tres sujetos, en circunstancias que llegaron a la comisaría solo dos.

Asimismo, el propio motivo Quinto consigna la declaración de la víctima del hecho N° 2, doña Loreto Alejandra Arrué Ávila. Describe a tres sujetos que aparecieron corriendo y le quitaron el celular cuando ella se bajó de su auto a la llegada desde el trabajo. A pesar de los violentos golpes, no soltó el celular sino hasta que le apuntaron con un arma. Después, huyeron en un automóvil. Ella entró a su casa y le vinieron a avisar que habían detenido a los imputados. Al salir, estaba carabineros en plena calle y tenía a dos de los cuatro sujetos que la habían asaltado. Reconoce a los sujetos por sus características físicas y por su acento peruano. En el auto en que habían huido estaba la carcasa de su teléfono y el aparato había quedado en la esquina donde apprehendieron a uno de los autores.

En el mismo considerando comparece un funcionario de carabineros, Jorge Sáenz Fernández, que declara que el chofer de otro auto les indicó que el que transportaba a los encartados había participado en un robo de un teléfono a una mujer. Los siguieron y capturaron, encontrando en poder de uno de ellos el teléfono de propiedad de doña Loreto Alejandra Arrué Ávila.

Por su parte, el funcionario de carabineros, don Gabriel Sánchez Albornoz, chofer del carro policial, señala que una persona que manejaba un vehículo indicó que el que les antecedió había participado en un robo; pero indica que la persecución y captura versó sobre 3 personas, una de las cuales fue detenida por él mismo. Después, en el automóvil encontró un arma de fuego. El compañero fue quien detuvo a Gonzales, quien portaba el teléfono de la víctima de este segundo hecho, y él fue quien detuvo a Bermeo.

Se trasladó a los dos detenidos en un mismo auto y no se hizo set fotográfico. Al llegar a la unidad policial, estaba esperando la víctima del hecho número uno, quien reconoció a los sentenciados. Sin embargo, al ser contrainterrogado precisa que la víctima solo reconoció a uno de ellos y no recuerda a cuál. Además, se declara que ninguno de los detenidos conducía el auto, puesto que salieron huyendo por sendas puertas de atrás.

QUINTO: Que, la recurrente, sostiene además que hubo prueba de la defensa no valorada.

En particular, los dichos del carabinero, don Erik Urbina Azócar, que se recogen en el considerando Sexto. En particular, tomó declaración al testigo de la defensa, don Jorge Luis Villena Encarnación, respecto de que, en efecto, Tommy Lee Bermeo había quedado de juntarse con él y su esposa, a las 16:00 hrs., pero que no había llegado porque previamente había sido detenido. También se transcribe los dichos de la esposa, doña Marina Josefa Paredes Moreno, quien corrobora los dichos del anterior testigo.

SEXTO: Que, el fallo establece el delito en su considerando Séptimo con pruebas que la recurrente califica de “feble”, por cuanto desconoce la ejecución rigurosa de los labores policiales y considera que no tiene credibilidad la declaración del coimputado de las víctimas y de los carabineros; por lo que no entiende la defensa cómo con estas falencias el Tribunal logra formarse la plena convicción de participación de la recurrente.

En el considerando Octavo los jueces fundamentan sus consideraciones afirmándose en el relato de las víctimas y de los carabineros a quienes se les formuló la

denuncia; en la utilización de un arma en ambos casos; en la participación de tres sujetos; y, en la proximidad espacio temporal de comisión de los delitos.

Respecto de la teoría de la defensa, esta es desestimada. La víctima del segundo hecho vio a los condenados en el lugar de detención y en el carro policial, mientras que la víctima del primer hecho les reconoció en la unidad policial, si bien sin especificar quién.

Por tanto, aunque no haya habido de parte de las víctimas una identificación singularizada de los condenados ni una atribución concreta de la actuación que les cupo, igualmente la interpretación sistemática y global de la prueba permite llegar a la convicción inequívoca de la participación de ambos imputados.

A mayor abundamiento, el sentenciado Gonzáles declaró e imputó participación directa y de manera específica al imputado Bermeo, lo que a juicio del tribunal es una confesión calificada que aporta para tener por acreditada de forma inequívoca la participación de este último, más allá de toda duda razonable.

Respecto de esta confesión, la sentencia razona que la participación confesada por Gonzales es como chofer del automóvil utilizado, en circunstancias de que las declaraciones de los carabineros dejan en claro que ninguno de los encartados cumplió tal función de chofer, lo que invalida y descarta lo confesado, en ese punto. Pero, por otra parte, en lo referente a su copartícipe, la confesión indica categóricamente la participación en el delito de Tommy Lee Bermeo Villena, como uno de los sujetos que bajaba del automóvil junto al otro sujeto, cuya identidad se desconoce, para sustraer las especies. Así, aun sin contar con tal testimonio, se logró acreditar su participación por los motivos expuestos a lo largo de la fundamentación, constituyendo este antecedente un reforzamiento crucial a la convicción de los jueces sobre la participación de Tommy Lee Bermeo Villena.

En este marco, la sentencia expresa que se desecha la tesis de la defensa, en cuanto a que la declaración de Gonzales haya sido acomodaticia, interesada y gananciosa, por cuanto no alteraba la participación de él mismo y su responsabilidad. De manera que ella surtía plenamente sus efectos probatorios respecto de Bermeo, en los términos expresados.

SÉPTIMO: Que el recurso, después de presentar los antecedentes que se acaba de reseñar, no hace con ellos ninguna revisión o análisis pormenorizado y preciso, para explicar la forma cómo se verifica en la sentencia el vicio de nulidad denunciado.

Simplemente, a partir de aquí, de forma vaga, abstracta y genérica, recuerda a la Corte el principio de inocencia y su correlato en el deber condenar solo cuando, con base en la prueba, asista una convicción más allá de toda duda razonable, según establece el artículo 340 del Código Procesal Penal; para lo que, añade, respecto de los testigos que deponen en el juicio oral no basta con *“la declaración misma sino que también la imprescindible percepción directa de la declaraciones de los testigos y las intransferibles sensaciones percibidas en una declaración, esto es, lo que se dice, lo que se calla, las condiciones al declarar, los titubeos, las expresiones del rostro y del cuerpo, y todo eso que se ha dado en llamar psicología del testimonio, como señala una autora”*.

La Corte lamenta que la letrada no identifique a la autora cuya doctrina cita; pues, ante tal anonimato y solo con una cita fragmentaria, no es posible dedicar seriamente el debido análisis de mérito a los asertos que de ella presenta. Sin embargo, hechas suyas esas palabras por la abogada, ciñéndose a esos límites, sí se puede señalar que llama poderosamente la atención que la defensa –quien se entretiene en esto pese a que, después de avanzar en más de dos tercios en la extensión de su escrito, aún no ha dado los argumentos concretos, directos y pertinentes para la nulidad que intenta en favor de su representado–, revele, con aquel halo de generalidad que se ha criticado que, en su concepto, las cuestiones de apreciación de la prueba testimonial se reducen a las “sensaciones” de los jueces que las escuchan; lo cual resulta inaceptable, por contrariar el derecho. La judicatura tiene el deber constitucional de “conocer” las causas, lo que constituye una actividad intelectual que traspasa de forma evidente con creces una pura actividad “sensorial”, como, en cambio, quiere persuadir la defensora, en la idea inexplicada de que ello acaso podría favorecer a su parte. Empero, tal banalización de la actividad forense, en caso alguno podría llevar a un profundo discernimiento que requiere la recta administración de justicia, con que la

abogada está llamada a colaborar de acuerdo a los estándares profesionales que conforman la *lex artis*.

OCTAVO: Que, finalmente, el recurso además se explaya en ciertas consideraciones, todavía de un modo puramente abstracto, relativas a la noción de “*duda razonable*” y en salvar una pretendida posibilidad de confusión entre ella y el dicho popular “*sin sombra de duda*”.

Asimismo, en este colofón también elucubra en el mismo tono sobre el “*principio de corroboración*” –que, sin embargo, en las antípodas de la denominación “principio”, que le da, explica como un juicio sobre el resultado de un razonamiento, y por tanto como todo lo contrario a lo que desde el punto de vista lógico podría situarse al inicio del razonamiento—. Añade además la consideración fundamental de que para honrar tal “principio”, se requiere de una pluralidad de pruebas. Y, por último, se adentra en la importancia teórica del principio de razón suficiente, que ilustra diciendo, “*según el cual nada puede ser nada más ‘porque sí’, pues todo obedece a una razón*”; y, advierte, para reforzar el punto y evitar los dislates del neófito, que el principio de razón suficiente se cumple “*cuando el razonamiento del juez está formado por deducciones razonables*”; lo que remata con la precisión de que el sentido del principio de razón suficiente “*es que todo juicio o enunciación requiere para ser verdadero, una razón suficiente...*”.

Todo ello queda coronado con el subtítulo “*No está de más recordar*”, que señala: “*En un Estado Democrático de Derecho y en una República en que sus habitantes son libres, todo acusado por un delito sólo (sic) puede ser condenado cuando se compruebe, a través de un juicio oral, público y contradictorio, que ha cometido una conducta ilícita en el mundo real*”.

NOVENO: Que, sin acertar a exponer o señalar la manera en que configuraría vicio concreto alguno, la defensora, en el subtítulo “Perjuicio”, olvida inexplicablemente la causa de que se trata en autos y, sin que ello sea óbice para seguir tratando el fallo de erróneo, indica que tales pretendidos errores “*causaron a mi representado don Geofrey Marino Jaime Mauricio, un grave perjuicio*”, el cual no es parte de este juicio y no coincide con su representado Tommy Lee Bermeo.

Por cierto, ni aquí ni en el petitorio vuelve a recordar que también había impetrado la nulidad por el artículo 342 letra d) del Código Procesal Penal; de modo que su impugnación a este respecto resulta güera.

DÉCIMO: Que, la recurrente concluye que todo esto constituye una infracción que afecta la acreditación de la participación en el delito e influye en la decisión final de condena por parte del Tribunal. De modo que, conforme a lo establecido en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, no queda otra opción para poder subsanar aquello que la anulación del juicio y de la sentencia.

Por último, conforme a los artículos 352 y 372 del Código Procesal Penal, solicita, en consecuencia, que esta Corte proceda a declarar la nulidad del juicio y de la sentencia determinado el estado en que debe quedar el procedimiento y ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado, para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral o la que se determine conforme a derecho.

UNDÉCIMO: Que, para resolver el recurso de nulidad respecto de una supuesta falta de razón suficiente para acreditar la participación del condenado Tommy Lee Bermeo, el análisis de la sentencia impugnada debe versar sobre el considerando Octavo, a la luz de lo indicado en los basamentos CUARTO a SEXTO de esta sentencia de nulidad, y también teniendo a la vista la prueba recogida en los considerandos Quinto y Sexto de la sentencia.

Más allá de que el recurso no explique de manera concreta el modo en que derechamente se produjo la infracción de este principio de la lógica al valorar la prueba de la lectura del fallo no se observa ninguna conclusión que repugne a la lógica; es decir, que las reglas de la recta razón conduzcan de un modo inequívoco a desechar o excluir.

Por el contrario, el razonamiento del tribunal resulta completamente acorde a la concatenación lógica de las consideraciones y las prueba que analiza y, asimismo, las que desestima.

Para arribar a esta convicción, el mismo considerando Octavo indica que el tribunal estimó que los relatos resultaron verosímiles, que lograron complementarse en



la sucesión fáctica descrita y que ello incluso se enlaza con el reconocimiento de la participación de Bermeo que hizo Gonzales.

En tal ponderación, los juzgadores señalan que la declaración de los carabineros y de las dos víctimas, junto con las demás circunstancias acreditadas, conducen a desestimar la poco persuasiva tesis de la defensa; dando cuenta de un razonamiento acabado y completo, que se desarrolla sin desatender ningún argumento presentado por la defensora ni las demás piezas relevantes de la causa.

No observándose problemas de índole lógica en la argumentación de los jueces, más bien parece que la defensa, simplemente, en su particular modo de entender el juicio y este recurso, otorga una valoración distinta al material probatorio. Pero, como se sabe, una invitación a ponderar de un modo prudencialmente distinto la prueba no es una materia propia del recurso de nulidad, sino que acaso lo sería de un recurso de apelación, que en este caso está excluido por la ley y, como sea, es de una naturaleza diversa al que se está conociendo en estos autos.

En este sentido, la distinta ponderación y hasta las “sensaciones” probatorias que reclama la abogada para modificar el juzgamiento, no sitúan la posición y argumentación adversa del tribunal fuera de las leyes de la lógica, y no sirven en caso alguno como herramienta de impugnación jurídica de la sentencia definitiva.

DUODÉCIMO: Que, a juicio de esta Corte, la sentencia no adolece del vicio de nulidad invocado ni de ningún otro. Pues, contra lo sostenido por la recurrente, se encuentra correctamente fundada y considera toda la prueba.

DECIMOTERCERO: Que, el recurso de Carlos Luis Gonzales Bravo, invoca la causal de nulidad relativa contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, que en su pronunciamiento se ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; ello, al producirse infracción al artículo 351 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 11 número 9 del Código Penal.

DECIMOCUARTO: Que, en particular, se cuestiona un aspecto puramente jurídico. En efecto, la recurrente indica que para la determinación de la pena se estimó, por una parte, que se configuraba la atenuante del art.11 N°9 del Código Penal,

respecto de Gonzales Bravo, cuya declaración prestada como medio de defensa, incorporó circunstancias que rodearon el hecho y la participación del acusado Tommy Lee Bermeo Villena, y que se tuvo en cuenta por el Tribunal para determinar su participación; tal como se observa en los considerandos Décimo y Undécimo de la sentencia definitiva.

Por la otra, en el mismo motivo Undécimo ya mencionado, se tuvo como norma de determinación de la pena, lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, por tratarse de un delito en carácter de reiterado; debiendo aumentarse la pena en un grado, desde el presidio mayor en su grado mínimo al presidio mayor en su grado medio, quedando el tramo de pena a imponer entre los 10 años y 1 día y 15 años, para ambos acusados.

Agrega el fallo que al respecto se debe considerar que concurre en cada uno de los sentenciados una circunstancia atenuante (las establecidas en el Código Penal, artículos 11 N° 6, para Bermeo, y 11 N° 9, para Gonzales), y además, lo dispuesto en la regla primera del artículo 449 del Código Penal, atendiendo a la extensión del mal causado.

De ello se extrae que se impondrá a ambos la pena de 10 años y 1 un día de presidio mayor en su grado medio, estimándose justa con relación al injusto cometido y la proporcionalidad que debe existir entre él y la pena.

DECIMOQUINTO: Que, en tal marco, la recurrente indica que el tribunal aplicó erradamente el artículo 351 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 11 número 9 del Código Penal, pues se condenó a su defendido a una pena superior a la que legalmente correspondía en derecho.

Añade que, si no se hubiera incurrido en la infracción denunciada, se habría aplicado a Gonzales una pena más beneficiosa dentro del grado de presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 7 años y un día a 10 años, por reconocerse en la misma sentencia la aminorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ello no se tradujo como corresponde al momento de establecer el *quantum* punitivo, el que fue de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio,

mas no de poder bajar el grado, considerando que la pena base del concurso material aplicado en este caso eran 10 años y un día.

DECIMOSEXTO: Que, la recurrente concluye solicitando la nulidad de la sentencia conforme lo dispone el artículo 373 b) con relación al artículos 351, 385 del Código Procesal Penal, y solicitando que se dicte, sin nueva audiencia pero separadamente, una sentencia de reemplazo, imponiendo a su representado la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.

DECIMOSÉPTIMO: Que, para la correcta inteligencia del cómputo de la pena realizado por el Tribunal, se debe tener a la vista la regla primera del artículo 449 del Código Penal: *“Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia”*.

DECIMOCTAVO: Que, los considerandos Décimo y siguientes, calculan adecuadamente la pena, pues el marco se fija en virtud del artículo 351 del Código Procesal Penal, por el que el sentenciado pasa al margen gradual de los 10 años y un día hasta los 20 años.

De ahí, la aplicación del artículo 449, regla primera, del Código Penal, justamente porque se tuvo en cuenta la atenuante del artículo 11 N° 9 del mismo código, conduce a los jueces a otorgarle la cuantía más baja posible, correspondiente al piso de los 10 años y un día.

En consecuencia, se descarta la posible nulidad por errónea aplicación del derecho en la determinación de la pena del sentenciado, Carlos Luis Gonzales Bravo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 352 3º y 374 letra e) del Código Procesal Penal, **se rechaza** los recursos de nulidad interpuestos por sendas defensas, del condenado, Tommy Lee Bermeo Villena, y del condenado, Carlos Luis Gonzales Bravo, contra la sentencia de 11 de junio del año dos mil veintiuno, en los autos RIT O-170-2021, del Segundo Tribunal de Juicio Oral de su consecuencia, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y Comuníquese. □ □



Redacción del Abogado Integrante señor Patricio I. Carvajal Ramírez.

La Ministra señora Inelie Duran Madina no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse con feriado legal.

N°Penal-2645-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y Abogado Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>